

Ajuste y mala comunicación

La controversia generada por la Circular N°2 del Servicio de Salud Magallanes deja varias lecciones que van mucho más allá de una diferencia administrativa o de un conflicto puntual con los gremios. Lo ocurrido expuso, una vez más, cómo en el sector público las decisiones presupuestarias pueden transformarse rápidamente en focos de tensión cuando los mensajes no son claros, las instrucciones se prestan para interpretaciones ambiguas y la confianza entre autoridades y funcionarios ya viene erosionada.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, hizo una admisión relevante y poco habitual en la administración pública al reconocer que "se está fallando con el mensaje". Y probablemente ahí está el centro del problema. Porque más allá de las aclaraciones posterior-

es, de los porcentajes reales del ajuste o de la intención original del documento, lo cierto es que cientos de trabajadores interpretaron la circular como una señal de recorte directo a derechos laborales y condiciones de funcionamiento que afectan diariamente la atención en salud.

Cuando en un hospital se habla de limitar horas extraordinarias, revisar suplencias o contener gastos, el temor aparece de inmediato. El sistema de salud pública funciona hace años bajo una lógica de sobrecarga permanente, donde muchas veces son precisamente las horas extra, las suplencias y los reemplazos los que permiten sostener servicios críticos. Por eso, cualquier señal de ajuste se lee inevitablemente desde la experiencia cotidiana de funcionarios que ya sienten que trabajan al límite.

La aclaración posterior de la directora -distin-

guiendo entre áreas clínicas y administrativas, asegurando que las horas extraordinarias clínicas seguirán pagándose y descartando paralización de concursos- ayuda a bajar tensiones, pero también confirma que el documento original tenía vacíos importantes. Si una circular requiere ser complementada pocos días después de emitida para evitar interpretaciones erróneas, entonces el problema no fue sólo la reacción gremial. Estamos ante una deficiencia real en la forma en que se elaboró y comunicó la medida.

También es cierto que el contexto nacional obliga a los servicios públicos a revisar gastos y buscar eficiencia. Nadie discute que el Estado debe ordenar sus cuentas ni que existen áreas administrativas donde pueden optimizarse recursos. La propia directora sostiene que las medidas ni siquiera alcanzaban el 2,5% de rebaja acordado por el Minis-

terio de Salud y Hacienda, y que el objetivo era evitar compras sobreestimadas o regularizar procesos pendientes hace años. Esa explicación parece razonable.

Sin embargo, en salud pública la discusión nunca puede reducirse únicamente a porcentajes presupuestarios. Aquí lo que está en juego es la capacidad del sistema para seguir respondiendo oportunamente a una población que ya enfrenta listas de espera, déficit de especialistas y una alta presión asistencial. Cuando los trabajadores perciben incertidumbre sobre sus condiciones laborales, el efecto no queda encerrado en una oficina administrativa, sino que repercute en todo el recinto hospitalario.

Lo sucedido deja además otra reflexión de fondo. En tiempos de ajustes fiscales, la transparencia y la comunicación interna no pueden tratarse como aspectos secundarios.